



TÍBET

Recuerdo de un olvido

Dolores GARCÍA-HIERRO

Los derechos humanos o son universales, o no son. Por desgracia, estos derechos son violados con machacona frecuencia por algunos gobiernos que se sientan en la Asamblea de la ONU y su condena no es todo lo frecuente y decidida que mereciera. El caso de la República Popular China es, quizá, el más llamativo y lo es porque este gigante militar y demográfico parece tener bula, una patente de silencio, a causa de su relevancia estratégica y, por qué no decirlo, también debido a las grandes y complacidas esperanzas que su nuevo capitalismo suscita entre las multinacionales, que miran hacia allá con ojos condescendientes y goalosos. Por eso es conveniente recordar o, lo que viene a ser lo mismo, combatir el olvido.

Desde que China invadió Tíbet en 1950, los derechos humanos recogidos en la carta de las Naciones Unidas de 1948 no han dejado de ser violados, pese a las promesas hacia

el exterior del Gobierno de la República Popular China. Múltiples informes avallan esta aseveración, entre ellos los de la ONU, de Amnistía Internacional, de la asociación internacional de Abogados

***Las autoridades chinas
están destruyendo el derecho
de los tibetanos
a una identidad cultural.***

por Tíbet, del Sierra Club, así como los elaborados por la oficina de derechos humanos del Dalai Lama.

Violaciones que incluyen decenas de casos de torturas. Tan sólo en 1997, hubo seis con resultados de muerte. Torturas por aplicación de descargas eléctricas, palizas, exposición intensa al frío en celdas pequeñas y oscuras, pinchazos y ferúlas en la boca, quemaduras intensas por contacto con chimeneas ardientes, incluida la extracción de fluidos corporales hasta la muerte.

Las desapariciones siguen produciéndose en la actualidad. Ignorando el paradero de las personas desaparecidas, las autoridades chinas actúan con total impunidad. En ocasiones, el Gobierno chino ha admitido que alguno de los desaparecidos había estado detenido, pero se ha negado a facilitar más detalles. Tal es el caso de Gedun Choekyi Nyima, un niño de nueve años, que desapareció, junto con sus padres, en mayo de 1995, y continúa en esa terrible situación. Existen, además, diez casos de desaparecidos tibetanos en 1997, entre ellos varios jóvenes menores de 16 años. Se ignora si han sido inculpados o condenados, si están vivos o muertos.

Al final de 1997 se contabilizaron 1.216 prisioneros políticos y de conciencia, aunque el número real probablemente sea mucho mayor. Esta re-

lación incluye a 295 mujeres y 39 jóvenes y niños menores de 18 años. Casi noventa de entre ellos están encarcelados con condenas de larga duración (más de diez años).

Tanak Jigme Sangpo, de 71 años, es el prisionero político más veterano de Tíbet. Lleva treinta años encarcelado y su liberación está prevista para el año 2011. En 1997, Chadrel Rinpoche fue condenado a seis años de cárcel por presidir la comisión de búsqueda de la reencarnación del Panchen Lama. La mayor parte de los prisioneros fue detenida arbitrariamente con cargos imprecisos, como «poner en peligro la seguridad del Estado», entre ellas algunos monjes detenidos por «haber fracasado en los trabajos con los equipos de reeducación». La falta de garantías jurídicas es absoluta. Detenciones prolongadas sin cargos, condenas sin pruebas (una visita a la India conduce a la condena como «espía del Gobierno tibetano en el exilio»), falta de asistencia jurídica, torturas... un panorama desolador. Las prisiones y campos de trabajos forzados abundan en Tíbet y especialmente en Lhasa (Sangyip, Toelung, Drapchi, Taktse y Trisam) en condiciones que, a menudo, hacen imposible la supervivencia.

Los derechos de las mujeres son pisoteados en Tíbet. Las políticas de aborto y esterilización forzada han contabilizado 883 casos sólo en 1997. Miles de mujeres tibetanas han sido multadas con sumas entre 200 y 400 dólares, una cantidad desmesurada para los ingresos de una familia tibetana, por el «delito» de quedarse embarazadas. La terrorífica política de natalidad china se ha aplicado con rigor y, aunque oficialmente se permite a las minorías étnicas (tibetanos, mongoles,...) tener dos hijos por mujer —frente al único que se les auto-

riza a las mujeres chinas—, la fuerte migración de chinos hacia Tíbet ha convertido a la población tibetana en minoritaria en su propia tierra. Los niños que han nacido más allá del límite demográfico marcado por las autoridades chinas ven negado su derecho a la escolarización y a las ofertas de empleo. Las políticas de contracepción mediante dispositivos intrauterinos se vienen realizando por la fuerza, sin información alguna a las mujeres ni seguimiento ni control sanitario, de todo lo cual se han derivado patologías diversas.

Las autoridades chinas intentan eliminar la cultura y la civilización tibetanas y, sobre todo, uno de sus soportes, la religión budista. A menudo, el partido comunista chino desde su óptica totalitaria ha justificado la negación de los derechos de la persona en la afirmación de los derechos colectivos. Sin embargo, esos derechos colectivos también están siendo destruidos en Tíbet y, en particular, uno de los más preciados: el derecho a una identidad cultural, aunque también los derechos a la salud, a la educación, al trabajo y a la vivienda.

Desde abril de 1996, una nueva campaña del Gobierno chino ha hecho de los monasterios y conventos de religiosos uno de sus objetivos políticos. El resultado de las sesiones de «reeducación patriótica» para instruir a los monjes sobre la maldad del Dalai Lama, el reconocimiento del niño designado por las autoridades chinas como Panchen Lama (en sustitución del designado por el Dalai Lama y detenido por el Gobierno chino) se ha saldado con 2.827 expulsiones de monjes y religiosas, 165 arrestos, 9 muertos y 35 abandonos voluntarios de los monasterios. Según los propios informes del Gobierno chino, 30.000 de los 46.000 monjes y religiosas budistas han recibido «reeducación

***Los tibetanos
son discriminados
en cuanto a la educación
y la asistencia médica.***

patriótica» y 1.780 de los 1.787 monasterios y templos han sido invadidos por los equipos de reeducación, que han impuesto nuevas reglas para dificultar la entrada de novicios y novicias, eliminando algunos estudios religiosos. Asimismo se han reconstituido los «comités de gestión de los monasterios», desviando las donaciones que éstos reciben hacia el Gobierno chino, o directamente hacia los funcionarios.

La discriminación racial contra los tibetanos es un hecho que incluye las esferas del empleo, la representación pública, la educación y la salud. La inmensa mayoría de los funcionarios públicos de Tíbet son chinos o escogidos por el Gobierno chino. Los trabajadores son obligados a dedicar buena parte de sus jornadas de trabajo (en algunos casos de 8 a 12 días al mes) al Gobierno chino sin remuneración alguna. Recientemente, 72 guías turísticos tibetanos han perdido sus trabajos y están siendo reemplazados por guías de origen chino.

En el terreno de la educación, los tibetanos han de pagar por recibir esos servicios. Por ejemplo, en la escuela deben pagar las sillas, los pupitres y, por supuesto, los libros y cuadernos. En los hospitales, los tibetanos son frecuentemente obligados a pagar el precio completo de la prestación sanitaria, lo cual hace difícil su acceso a los hospitales, que son gratuitos para la pobla-

ción de origen chino. La educación se imparte en lengua china, incluida la escuela primaria, lo que supone una clara discriminación contra niños de lengua materna tibetana. Todo ello conduce a que el 30% de los niños tibetanos esté sin escolarizar, frente al 1,5% sin escolarizar de los niños chinos. Los niños tibetanos que acuden a las escuelas primarias (6 a 12 años) son objeto, además, de otras formas de penalización y castigo. Frecuentemente son obligados a limpiar los wáteres y lavar la ropa de los profesores, siendo norma aplicarles los castigos mediante golpes con cañas de bambú y azotes con cables y cinturones si no son capaces de responder a las preguntas sobre la Revolución china y sus líderes.

Una de las mayores amenazas a la supervivencia tibetana es la política de transferencia masiva de población, iniciada a mediados de 1994. El establecimiento de los nuevos inmigrantes chinos ha ido unido a la construcción de viviendas, ofertas de empleo, escuelas y hospitales para ellos en los grandes centros urbanos y otras áreas, marginando crecientemente a la población tibetana, sobre todo en los entornos rurales. De hecho, los seis millones de habitantes tibetanos han sido sobrepasados ya por los 75 millones de colonos chinos que han impuesto una economía «a medida» dentro de la cual los tibetanos están siendo desplazados.

***En Tíbet viven actualmente
seis millones de tibetanos
frente a 75 millones
de colonos chinos.***

A todo lo descrito, se unen el expolio y la devastación del medio natural en Tíbet. Una de las deforestaciones mayores en toda Asia que, según indican informes fiables, dio lugar el pasado año a terribles inundaciones provocadas por el río Yangtzé, y que se han cobrado miles de vidas aguas abajo. La excepcional fragilidad del altiplano tibetano, el mayor y más alto del mundo, se ha visto gravemente afectado por las nuevas reglas de cultivo impuestas por las autoridades chinas. Reglas que han obligado a sustituir los tradicionales cultivos de cebada, adaptada al medio, por trigo, dando lugar a la ruptura del equilibrio ecológico y a la reaparición de hambrunas en el altiplano.

La deforestación de los bosques está dejando las montañas expuestas a una erosión sin precedentes, amenazando la supervivencia de flora y fauna. Tal es el caso del panda gigante, el mono dorado o el leopardo de las nieves. El Gobierno chino, lejos de llevar adelante medidas de protección, permite a sus soldados que disparen las armas automáticas sobre algunos de los mamíferos del altiplano sin que ninguna medida disciplinaria ponga coto a esta práctica depredadora.

Por otra parte, y desde 1972, hay estaciones en Tíbet armas nucleares. Laboratorios de investigación militar han sido situados allí y arrojan sin control basura nuclear a las llanuras cercanas, lo cual ha causado la muerte y graves enfermedades por radiación a un número no contabilizado de nómadas tibetanos.

Con todo, el proyecto más grave es el de la creación de innumerables megaplantas hidroeléctricas en los ríos de Tíbet, con el fin de aportar electricidad a otras partes de China. En los próximos

años se anegarán miles de kilómetros cuadrados, se inundarán vegas y riveras y se desplazará a la población local. El proyecto de construcción de una central hidroeléctrica en el lago Yandrok Tso (un lago considerado sagrado, situado entre Lhasa y Shigatse) provocará, junto al proyecto de las Tres Gargantas en el río Yangtzé, uno de los peores desastres ecológicos del siglo XXI.

El primer prisionero ecologista en Tíbet se llama Nazod Trulku, líder espiritual del monasterio del Nazod. Fue detenido en marzo de 1996 después de repartir octavillas donde se lamentaba de la destrucción del entorno del monasterio que estaba trayendo «el hambre y la muerte a numerosas criaturas vivientes». Una vez detenido, fue torturado y luego condenado a seis años de prisión.

Como resultado de todas estas violaciones de derechos individuales y colectivos, como resultado de la persecución política, cultural y religiosa a que está siendo sometido el pueblo tibetano, se estima que desde 1959 (año del control total y el exilio forzado del Dalai Lama) aproximadamente 1.200.000 tibetanos (una sexta parte de la población, entre los que se cuentan 100.000 torturados hasta morir) han encontrado la muerte como consecuencia directa de la brutal represión a que han sido sometidos por el Gobierno chino. Represión que tuvo su punto máximo entre 1959 y 1966, periodo en el cual, por ejemplo, de los 115.600

monjes y religiosas y 1.600 «budas vivientes» sólo sobrevivieron unos 6.900 monjes. La represión siguió, se redució incluso, durante los años de la revolución cultural (1966-1977). Luego, durante los años de presidencia de Hu Yaobang, llegó una relativa tolerancia, pero más tarde volvió a intensificarse la represión, sobre todo a partir de 1987. Como consecuencia de todo ello, existen hoy unos 131.000 exiliados, la mayoría en la India (100.000) y Nepal (25.000), que han escapado al régimen chino en travesías de extrema dureza durante las cuales muchos han perdido la vida por hipotermias, deshidratación y otras enfermedades, al cruzar el Himalaya a pié, de noche, sin comida, intentando sortear la vigilancia del ejército chino. Aproximadamente 6.000 monasterios han sido destruidos o saqueados, perdiéndose de forma irremplazable joyas arquitectónicas y artísticas de la cultura tibetana y de la universal.

Desde su exilio en Dharamsala, India, Tenzing Gyatso, el XIVº Dalai Lama de Tíbet, viene trabajando sin descanso a fin de llevar a la conciencia de la comunidad internacional las violaciones flagrantes de los derechos humanos en el Tíbet. En 1989 fue recompensado por ello con el premio Nobel de la Paz. Mas, a pesar de su influencia, obvia entre su pueblo, de sus esfuerzos contemporizadores con las autoridades chinas, el Gobierno chino le ha negado siempre el reconocimiento de su posición como líder espiritual de Tíbet.